

LAS COOPERATIVAS AGRARIAS Y EL PROYECTO DE COOPERATIVAS

por

JOSE CARDONA CONTHE*

1. OPORTUNIDAD DE UNA REFLEXION SOBRE LA LEGISLACION COOPERATIVA

Las leyes de Cooperativas constituyen las reglas del juego básicas que rigen el funcionamiento de nuestras Cooperativas. Como es sabido, a diferencia de la legislación Mercantil, sobre esta materia el Estado no tiene competencias exclusivas, teniendo en la actualidad asumida la competencia normativa la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. Tenemos por tanto un mapa actual con una Ley General de Cooperativas y cinco leyes autonómicas diferentes, la última de ellas muy reciente, a las que previsiblemente se unirán otras varias a corto y medio plazo.

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España, las Cooperativas y sus Uniones y Federaciones han sido conscientes de la decisiva importancia de participar en estos procesos legislativos como administrados y destinatarios de la norma, a fin de conseguir que se ajuste a nuestras justas aspiraciones. Para ello, han procedido a estudiar en detalle las cuestiones fundamentales que deberían tenerse en cuenta en toda reforma legislativa a través de un trabajo colectivo cuyas líneas fundamentales se tratarán de exponer en esta Comunicación. Y tras la fase de estudio, será labor del movimiento cooperativo el transmitir a los responsables políticos y parlamenta-

* Asesor Jurídico.

FUENTE: Confederación de Cooperativas Agrarias de España: «Sembramos futuro», documento de trabajo y conclusiones del *II Congreso de Cooperativismo Agrario*, Madrid, 1997.

rios de su ámbito estas propuestas en beneficio del propio sector, y podrán hacerlo con mayor eficacia precisamente por tratarse de un paquete de propuestas que cuenta con el respaldo y el aval del movimiento cooperativo nacional. El Cooperativismo agrario debe asumir, pues, el protagonismo que merecen su sólida tradición y su decisiva importancia económica en el mundo rural.

Asumimos de antemano que este será un proceso largo y complejo, en que será preciso concitar muchas voluntades, y que todo proyecto que presentemos estará siempre sujeto a revisión y actualización, no sólo porque las sucesivas leyes que se promulguen irán enriqueciendo las posibilidades sino porque de lo que se trata en definitiva es de conseguir el mejor marco jurídico posible para nuestras cooperativas, y en esa tarea nuestro mejor maestro siempre será la experiencia del día a día.

2. LA FILOSOFIA DE NUESTRA PROPUESTA

Parece necesario abordar de antemano cuáles son los puntos de partida, cuál es la filosofía general de las propuestas del movimiento cooperativo, para pasar más adelante a detallar los aspectos concretos de la reforma.

2.1. El objetivo de las reformas legislativas debe ser mejorar la competitividad de las cooperativas: una ley dinamizadora

A lo largo de todo este Congreso constataremos los esfuerzos que el movimiento cooperativo está realizando para analizar la situación crecientemente compleja y cambiante de los mercados, definiendo sus mecanismos de adaptación a las nuevas situaciones a fin de identificar los factores de su propia competitividad. La intercooperación y la diversificación se erigen en las grandes vías para llegar a este objetivo ya que, en un mundo que se transforma a velocidad vertiginosa, la única garantía de supervivencia es la capacidad de innovar.

El marco jurídico resulta de especial importancia en dos grandes apartados, a saber: primero, reforzando el carácter empresarial de las empresas cooperativas, y segundo, flexibilizando los mecanismos de su actuación societaria y financiera.

Reforzar el carácter empresarial de las cooperativas no puede ser un tópico, debe ser un compromiso voluntariamente asumido por los responsables cooperativos como ejercicio de su propia responsa-

bilidad. Lejos de inútiles demagogias, debemos tomar conciencia de que ser empresa conlleva el reto de asumir determinados compromisos de solvencia económica, transparencia en la gestión y garantía ante terceros.

Y flexibilizar los mecanismos de actuación societaria y financiera supone potenciar la gestión de los órganos societarios, delimitando sus funciones, y dotar a las Cooperativas de una especie de «caja de herramientas» de entre las que cada una escogerá la más apropiada para su propia dinámica empresarial.

Con estos dos apartados, pretendemos que las Cooperativas funcionen mejor; incrementen su prestigio entre sus socios y ante la sociedad, y así puedan ganar socios que actualmente están fuera del movimiento cooperativo.

2.2. Los Estatutos como la norma suprema de la Cooperativa: una ley estatutaria y no reglamentista

Las propuestas de reforma han de ser enfocadas desde las necesidades de todo tipo de Cooperativas, locales, comarcales y nacionales; de primero y de segundo y ulterior grado; de producción, de comercialización, de servicios agrarios y mixtas; de zonas dedicadas al monocultivo extensivo o a una diversidad de productos; cooperativismo consolidado y de esquemas establecidos y cooperativismo nuevo que busca sus líneas de actuación y expansión.

Por consiguiente, entendemos que una nueva Ley debe dotar a los Estatutos de un marco suficientemente flexible para que cada Asamblea los defina conforme a las necesidades concretas de su Cooperativa, que nadie mejor que ella misma sabrá interpretar.

2.3. Los principios cooperativos esenciales deben ser tutelados por la ley: una Ley Cooperativa para las Cooperativas

Además de flexible, la legislación debe ser clara en la formulación de los límites a la libertad estatutaria, para evitar que se desnaturalice la esencia de lo cooperativo. Por mucha libertad que se quiera dar a los Estatutos, éstos deberán cumplir con unos mínimos, por debajo de los cuales no se puede hablar de Cooperativa. Se debe buscar un equilibrio entre el excesivo encorsetamiento y una pérdida inaceptable de la esencia de lo que es una Cooperativa.

Ello supondrá, en la práctica, que los Estatutos podrán regular pero no suprimir el régimen de baja voluntaria del socio; podrán establecer el sistema del reparto de retornos, pero centrándolos no en el capital de cada socio sino en su actividad cooperativizada; que podría existir un voto ponderado, pero siempre referido al volumen de la actividad de cada socio; que se podrá remunerar el capital pagando intereses, pero no ilimitadamente, etc.

2.4. La legislación debe recoger las peculiaridades autonómicas sin dejar de ser armónica a nivel nacional; una ley propia compatible con las otras sin «efectos frontera»

La legislación cooperativa autonómica debe servir para reconocer y amparar las particularidades del cooperativismo en las distintas zonas de España. Así, el respeto de las legislaciones autonómicas a las particularidades de sus Cooperativas debe ser total.

No obstante, este aspecto no tiene por qué afectar al esquema básico de lo que entendemos por Cooperativa, que puede y debe ser común en lo esencial, como lo es el esquema de las Sociedades mercantiles, anónimas o limitadas. La propuesta única a nivel nacional pasa por nuestro convencimiento de que sería negativo dibujar un mapa legislativo fragmentado en múltiples normas de contenido completamente distinto, que podría dar lugar a situaciones de desigualdad de oportunidades entre las Cooperativas de distintas Comunidades Autónomas.

La especialidad autonómica puede ser abordada con la suficiente visión de conjunto como para que sea totalmente compatible con la necesaria armonía en los regímenes legales y fiscales que evite todo obstáculo a la libre competencia en el funcionamiento de las Cooperativas en este mercado único.

Sería indeseable que en el mapa resultante dentro de unos años existiesen «efectos frontera» que distorsionasen el funcionamiento normal de las Cooperativas o sus socios o desviasen la constitución de Cooperativas hacia unas zonas u otras en función de reales o pretendidas ventajas legales o fiscales.

Naturalmente, esta compatibilidad que pretendemos se puede lograr con mucha más facilidad en el marco de una legislación flexible, que permita a los Estatutos su libre adaptación a las peculiaridades de cada zona, y ello tanto desde un punto de vista estático —cuando cada Cooperativa adapte sus Estatutos a la nueva Ley por primera vez— como dinámico —cuando decida soberanamente sus posteriores modificaciones estatutarias.

3. EL CONTENIDO DE NUESTRA PROPUESTA

No es objeto de esta comunicación el describir el proceso por el que se ha llegado a configurar esta propuesta. Baste saber que se trata de un trabajo colectivo en el que han intervenido muchas personas y entidades, todas ellas vinculadas y comprometidas con el movimiento cooperativo, entre las que es justo destacar la labor del Departamento Jurídico de Confederación y de los Letrados Asesores de las distintas Federaciones; que se envió un cuestionario a todas las Federaciones y Uniones Territoriales; que se han realizado numerosos Encuentros, Jornadas y Cursos debatiendo cada uno de los puntos que a continuación se expondrán y que, finalmente, se ha participado en el CEPES en la redacción de una propuesta marco para que sirviese de base a la posible reforma de la Ley Estatal.

3.1. Propuesta relativa al objeto y la actividad

3.1.1. EL CONCEPTO DE COOPERATIVA

Defendemos un concepto amplio de Cooperativa, según el cual y en esencia se considera Cooperativa la sociedad que desarrolla una empresa en común con el objeto de realizar cualquier actividad económica o social al servicio de sus miembros, atendiendo a la comunidad de su entorno y ajustando su estructura y funcionamiento a los principios cooperativos.

3.1.2. EL OBJETO SOCIAL

El objeto social de una Cooperativa no debe estar definido de manera que suponga *una traba* a las actividades que puedan redundar en beneficio de sus socios. Resulta especialmente interesante la solución que el legislador navarro [art. 62.2.º Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra («BOE», núm. 245, de 10 de octubre, págs. 30358 y ss.)] ha alcanzado para las Cooperativas Agrarias, que engloba cualquier fin propio de la actividad agraria o ganadera, desde actividades tradicionales como la transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios o el fomento y gestión del crédito o de los seguros agrarios, hasta los servicios para el fomento y desarrollo rural, e incluso permitiendo la posibilidad de incluir como fines secundarios la prestación de servicios o el *suministro de bienes para el uso y consumo*, se entiende personal o familiar, de sus socios.

3.2. Propuestas de indole societaria

Son las que afectan a los derechos y deberes de la sociedad y de los socios. Abordan problemas tales como la necesidad de potenciar el papel de los socios activos o fomentar el ingreso de nuevos socios.

3.2.1. EL VOTO PONDERADO

Se trata de una cuestión no exenta de polémica, en la que la tradición cooperativa y los principios de la Alianza Cooperativa Internacional recogen el principio de igualdad de voto entre los socios. Pero hoy el desarrollo del cooperativismo agrario requiere reconocer más peso a quien más aporta, no en capital sino en la actividad de la Cooperativa.

Esta es la línea que han seguido la reciente Ley Foral Navarra de julio de este año (art. 62.5.º Ley Foral Navarra, cit.), que establece para las Cooperativas agrarias (no para las restantes) un sufragio ponderado de uno a cinco votos, con una ponderación mínima de tres, y además como principio de obligado cumplimiento. Esta medida, que ha causado sorpresa en distintos ámbitos por establecerse por imperativo legal, fue sin embargo solicitada por el movimiento cooperativo navarro como la mejor forma de garantizar que en sus Asambleas tuviesen forzosamente más peso los socios que más producción aportasen. De este modo se pretende evitar las resistencias de quienes se opongan a este voto ponderado, ya que la opción del voto igualitario como tal ha desaparecido.

A nivel nacional, los debates sobre el voto ponderado consolidaron unánimemente la idea que proponemos:

- 1) Que libremente los Estatutos opten entre el voto ponderado o el igualitario.
- 2) Que la ponderación de los socios personas físicas pueda oscilar como mínimo entre uno y tres votos, no descartándose llegar a los cinco.
- 3) Que los criterios concretos de ponderación sean establecidos por cada Cooperativa agraria, pero siempre en función de la actividad cooperativizada y no del capital.

3.2.2. PROTEGER A LAS COOPERATIVAS DE LAS BAJAS VOLUNTARIAS

El derecho del socio a separarse voluntariamente de la Cooperativa constituye un elemento esencial del concepto de Cooperativa se-

gún la ACI, y entendemos que debe ser mantenido, si bien no hasta el punto que ponga en peligro la estabilidad y viabilidad de la sociedad.

En muchos casos la Cooperativa trata de seguir funcionando tras haber aprobado fuertes inversiones incluso con el voto favorable del socio que más tarde pide la baja injustificadamente y provoca con su actitud un perjuicio doble, primero por la falta de producto cuya comercialización soporte las futuras amortizaciones, y segundo, porque deja de capitalizar y además exige la devolución de su capital. Proponemos que se amplíe el plazo máximo de preaviso a un año. No nos parece suficiente el hecho de poder atribuirle su participación en las pérdidas existentes ni siquiera (con ser interesante) el sistema de algunas leyes que permiten autorizaciones especiales de la Administración para ampliar el plazo de reembolso. También en este punto la legislación navarra es la que ha ido más allá, permitiendo a los Estatutos (arts. 13.1° i) y 23.3° Ley Foral Navarra cit.) regular el sistema de protección más adecuado, y estableciendo que el socio será responsable de las obligaciones calculadas según el importe que la Cooperativa tenga pendiente de capitalizar, entendiendo por pendiente de capitalizar la cifra resultante de restar del activo inmovilizado el pasivo compuesto por los fondos propios de la entidad.

3.2.3. FOMENTAR LA ENTRADA DE NUEVOS SOCIOS COMO SOCIOS TEMPORALES Y LA DEPURACION DE LOS SOCIOS INACTIVOS MEDIANTE LA FIGURA DE LOS SOCIOS EXCEDENTES U HONORARIOS

La figura de los socios temporales existe en varias de las legislaciones autonómicas, por lo que proponemos se siga el modelo de la Ley de Cooperativas de Euskadi, que se basa en que resulta más apropiado este sistema de aproximación de nuevos socios (si los Estatutos así lo deciden) que el de trabajo como terceros. Su límite es 1/5 de los socios y de los votos de la Asamblea.

La figura de los socios excedentes u honorarios se propone como salida para muchos socios que apenas tienen actividad, pero mantienen una fuerte vinculación afectiva con la Cooperativa, que en muchos casos contribuyeron a fundar, y además no es conveniente obligarles a darse de baja, pues ello conllevaría el reembolso de su capital. Proponemos que como máximo puedan tener el 10% de los votos en una Asamblea. La solución de transformarlos en asociados no es totalmente satisfactoria, pues a veces sí utilizan algún servicio de la Cooperativa. La ley navarra ha solucionado esto sin crear esta figura, simplemente autorizando a los asociados a utilizar los servicios cooperativos, con lo que se desdibuja la frontera entre socio y asociado.

3.2.4. LOS ASOCIADOS

Se propone la flexibilización de esta figura para conseguir que pueda captar capitales relevantes. Para ello es preciso, conforme al modelo valenciano (Art. 23 bis, Ley Valenciana de Cooperativas) posibilitar su entrada en el Consejo Rector (como máximo, 1/3 de votos), ampliar su derecho a voto en la Asamblea, que en la legislación nacional estaba limitado al 20%, y permitir la opción entre retribuir el capital con intereses o con una parte de los beneficios anuales.

3.3. Propuestas de naturaleza organizativa

Se trata de mejorar el sistema para hacerlo más eficaz, dotando de mayor operatividad al Consejo Rector.

3.3.1. LA ASAMBLEA

Se propone mantener su papel fundamental en la vida de la sociedad, como expresión del sentir mayoritario de la masa social, pero evitando que el Consejo Rector se vea obligado o busque derivar su propia responsabilidad en la Asamblea. Se proponen estas modificaciones al sistema actual: elevar del 10 al 20% el número de socios que pueden convocar Asamblea Extraordinaria, y del 5 al 10% el de los socios que pueden introducir puntos en el Orden del día; eliminar la necesidad de *quorum* mínimo para la celebración de la segunda convocatoria; reducir a 40 días el plazo para impugnar los acuerdos de Asamblea que sean anulables; flexibilizar para las Cooperativas con gran número de socios (a partir de 500 socios) el sistema de Asambleas de Delegados y Juntas Preparatorias.

La legislación navarra ha introducido algunos matices interesantes, al reservar a la Asamblea sólo los asuntos esenciales (cuentas, retornos, pérdidas y excedentes, estatutos, reglamentos y normas de funcionamiento), dejando al Consejo la aprobación de inversiones que no superen el 25% del valor del inmovilizado de la Cooperativa (arts. 33.1° a) y 37.1° b) Ley Foral Navarra cit.).

3.3.2. EL CONSEJO RECTOR

Dos son los apartados fundamentales respecto del Consejo Rector, uno su funcionamiento y competencias y otro su régimen de responsabilidad.

Su funcionamiento debe clarificarse en aspectos tales como las incompatibilidades por parentesco, que son una traba en las sociedades pequeñas que los Estatutos deben poder regular; en la participación de los trabajadores, que debe reservarse sólo a los trabajadores fijos continuos y no a los discontinuos, y en la representación de los socios personas jurídicas, en que proponemos se establezca la responsabilidad solidaria del consejero con la empresa que representa, que podrá revocar su apoderamiento, pero no sustituirlo, porque ello es competencia de la Asamblea. Se debe introducir la posibilidad de que los Estatutos regulen la existencia de una Comisión Ejecutiva, así como un Administrador único si la sociedad tiene menos de 10 socios.

Sus competencias deben ampliarse conforme a lo que establezcan los Estatutos, un poco en la línea de lo apuntado de la legislación navarra.

Y en cuanto al régimen de responsabilidad, la propuesta nacional va en la dirección de homologar el sistema con el de las Sociedades anónimas, a diferencia de la legislación navarra, que ha suprimido la referencia a la acción individual de responsabilidad y reservado la posibilidad de acción social sólo a los socios y no a los terceros perjudicados.

3.3.3. LOS INTERVENTORES

Debería poderse autorizar en Estatutos el nombramiento como interventores de terceros no socios para profesionalizar el cargo, con el límite de la mitad de sus miembros. La duración máxima del cargo debería ampliarse a cuatro años.

3.3.4. EL DIRECTOR

Debe ser obligatorio cuando existe sección de crédito, conforme a la legislación Catalana (Art. 44.1 Ley catalana.)

3.3.5. EL LETRADO ASESOR

Debe actualizarse el límite a partir del cual es obligatorio a la cifra de 500 millones de pesetas de volumen de negocio anual, conforme a la legislación valenciana.

3.4. Propuestas de naturaleza económica

Algunos aspectos de la propuesta afectan al modo de calcular la base imponible tributaria, esencialmente a efectos del Impuesto de

Sociedades, por lo que para su efectividad plena deberán ser abordados por el legislador competente en la materia. Siendo conscientes de ello, las incluimos en nuestra propuesta por entender que es un primer paso para alcanzar el resultado deseado.

3.4.1. CAPITAL SOCIAL MINIMO

Se trata de ofrecer garantías de solvencia frente a terceros. La existencia de un mínimo por determinar está contemplada en el Proyecto de Sociedad Cooperativa Europea, en cuyos trabajos se ha barajado la cifra de 100.000, 60.000 ó 50.000 ECUS. Este mínimo, que no existe en la legislación nacional, remitiéndose a los Estatutos, ha sido situado por la Ley de Euskadi en un millón de pesetas, por la Ley Navarra en 250.000 ptas. y por la ley Valenciana en medio millón (Art. 77.1 de la LGC; Art. 7 de la Ley navarra; Art. 51.2º de la Ley Valenciana). Parece esta última cifra la más adecuada, si bien cada Comunidad Autónoma deberá analizar la situación del sector para encontrar el punto de equilibrio para no obligar a la disolución de gran número de Cooperativas que no lo alcancen. Por consiguiente, sería deseable establecer un período transitorio para alcanzarlo.

3.4.2. NUEVAS FORMULAS DE FINANCIACION. LA REESTRUCTURACION DE TODO EL SISTEMA DE FONDOS PROPIOS

La propuesta cooperativa que hoy exponemos pretende ir más allá de introducir matices dentro del marco de la legislación general. Conviene plantear una reestructuración de todo el sistema para hacerlo más acorde con las necesidades del cooperativismo agrario actual.

En este sentido, la reciente ley foral navarra de julio de este año ha establecido un sistema sustancialmente distinto para los fondos propios de la Cooperativa, y en especial, de las agrarias, que recoge muchas de las propuestas del sector. Aunque se le pueda reprochar cierta falta de claridad en su tratamiento y sistemática (por ejemplo, se incluyen en el artículo 44, dedicado al capital, elementos tan ajenos al mismo y absolutamente heterogéneos como las cuotas periódicas que se destinan al FRO, las obligaciones, las participaciones especiales, los títulos participativos, las cuentas en participación y las subvenciones de capital, destinadas a la Reserva especial por subvenciones. Además, no se coordina sistemáticamente con el artículo 46 sobre Fondos Propios, ni ambos con el artículo 63 sobre «Fondos Patrimoniales», entre los que se incluye la reserva especial por APA, que pa-

rece escapar a todos los intentos de clasificación del legislador navarro). Parece que ha conseguido ofrecer prácticamente todas las posibilidades y en las mejores condiciones posibles, y dada su constante remisión a estatutos, probablemente pueda adaptarse a diversas situaciones. Conviene recorrer en detalle todo el sistema para su mejor comprensión.

El capital «tradicional», es decir, el variable, se refuerza en su carácter de permanencia para garantía de terceros y socios, al existir un mínimo de 250.000 pesetas, como queda dicho (art. 7 Ley Foral Navarra cit.), y además porque *ya no resulta posible compensar pérdidas con cargo a capital* (art. 63.3° Ley Foral Navarra cit.), restringiéndose finalmente su carácter de reembolsable por bajas en las Cooperativas infracapitalizadas (véase apartado 3.2.2. anterior). Se recoge como posibilidad su renovación conforme al sistema de «capital rotativo» (art. 63.1° Ley Foral Navarra cit.), que permite devolver al socio su capital desembolsado en un ejercicio anterior en varios años (por ejemplo, en diez años) desembolsando su nueva aportación cada año en proporción a su actividad, de manera que progresivamente se alcanza una perfecta correlación entre el capital y la actividad de cada socio. Y se permite su remuneración con intereses hasta de seis puntos por encima del legal del dinero, con la posibilidad adicional de su actualización por revalorización del inmovilizado o por capitalización de reservas generadas por excedentes siempre que éstas alcancen en su 50% para dicha actualización. Los nuevos socios deberán aportar como máximo el mismo capital que los socios existentes en la Cooperativa (art. 44.6° Ley Foral Navarra cit.) incluidas las actualizaciones según dispongan los Estatutos.

La figura de las aportaciones voluntarias a capital, infrautilizadas por muchas Cooperativas sujetas a la Ley General por desconocimiento o por sus limitaciones, deberían flexibilizarse, ampliando el plazo de suscripción y eliminando su requisito de permanencia para permitir que en el acuerdo de su emisión se fije un vencimiento a semejanza de lo establecido en el artículo 52 bis de la legislación valenciana, que establece además un sistema de prorrata proporcional al capital para el caso de que haya exceso de solicitudes.

Junto a este capital variable, la legislación navarra contempla la posibilidad de una especie de «capital social fijo» (art. 46.3° Ley Foral Navarra cit.) a semejanza del que tienen las Sociedades Mercantiles, constituido por toda deuda perpetua subordinada que no sea exigible hasta la liquidación de la Cooperativa y que sólo sea reembolsable mediante consentimiento expreso o tácito de los acreedores, ya que en caso de que sea reembolsable sin consentimiento de los acreedores en el plazo mínimo de cinco años, se incluirá en el apartado de

fondos propios variables. Así, las participaciones especiales y títulos participativos, ya existentes en la ley catalana, se describen conforme al modelo vasco, que se ajustaba a las necesidades financieras propuestas por el grupo Mondragón, y que nos parece conveniente incluir en nuestra propuesta.

Estas nuevas figuras, aún asumiendo que de momento no tengan gran implantación en muchas Cooperativas, deberían contemplarse en toda reforma legislativa, por ser instrumentos de gran interés de cara al futuro, sobre todo como posibles vías de intercooperación o colaboración con otras entidades públicas o privadas.

Por otra parte, se modifica el régimen de los Fondos de Reserva, flexibilizando las normas sobre la dotación mínima al Fondo de Reserva Obligatorio y al de Educación y Promoción, cuya suma es decreciente conforme aumenta la proporción de aquél respecto del capital (art. 50.2º Ley Foral Navarra cit.) y en la que se liberan el 50% de los excedentes extracooperativos, cuyo destino sería el Fondo de Reserva Voluntario, siempre conforme a Estatutos. Desaparece la limitación de la cuota de ingreso de nuevos socios, que podrá dirigirse al Fondo Obligatorio o al Voluntario, y se contempla la posibilidad de que los Estatutos regulen un porcentaje mínimo de dotación directa (art. 62.2º Ley Foral Navarra cit.) para cada socio, se entiende no subordinada a la obtención de resultados positivos en el ejercicio (véase nota al inicio del presente capítulo).

Conviene hacer énfasis en que los Fondos de Educación y Promoción deben ser instrumento de verdadero fomento cooperativo, reforzando su papel y posibilitando que sean gestionados en común por varias Cooperativas a través de su Federación, Cooperativas de segundo grado, o entidades similares, suprimiendo la necesidad de aplicar lo no gastado en el ejercicio a Deuda pública.

3.4.3. LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

Para la determinación del resultado del ejercicio, la ley Foral navarra ha recogido sin titubeos nuestra vieja aspiración (aspiración finalmente recogida en la reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades, introducida en el Real Decreto-Ley de 31 de diciembre de 1995, «BOE» n.º 313 de 31/12) de que se considerase gasto del ejercicio el valor real de liquidación del producto del socio, entendido como el precio de venta menos los gastos directos e indirectos de la Cooperativa; pero además establece rotundamente que en las Cooperativas agrarias registrá el principio de correlación de ingresos y gastos de cada campaña, con imputación temporal de los mismos en cuanto se

conozca la liquidación final al socio. En cuanto a los ingresos (impropiamente habla de «beneficios extracooperativos» en el artículo 49.2° cuando debería hablar de «ingresos extracooperativos», por coherencia con el párrafo anterior) se limita a calificar de extracooperativos los procedentes de operaciones con terceros, plusvalías u «otras fuentes ajenas a los fines de la Cooperativa». En este último apartado tendría cabida nuestra pretensión de que se considere cooperativos a los ingresos procedentes de inversiones en empresas participadas mayoritariamente por Cooperativas (sea cual sea su forma jurídica, cuando su actividad sea preparatoria, complementaria o subordinada a la de la Cooperativa).

Los beneficios del ejercicio, tras dotar los Fondos Obligatorios, pueden ir al Fondo de Reserva Voluntario (repartible o irrepartible), que en todo caso podrá nutrirse de hasta el 50% de los beneficios extracooperativos, el porcentaje que se establezca de los cooperativos y las deducciones por baja, las sanciones y las cuotas de ingreso o periódicas. El resto son retornos que, conforme al sistema habitual, pueden ser repartidos, capitalizados o incorporados a un Fondo especial (art. 51.2° Ley Foral Navarra cit. Véase asimismo el art. 63.2 *in fine* sobre la diferencia entre fondos patrimoniales y fondos que componen el pasivo exigible).

En el sistema navarro las pérdidas extracooperativas se compensarán por orden, con cargo primero a Reservas generadas por beneficios extracooperativos, luego a Reservas generadas por resultados cooperativos y finalmente con aportaciones de los socios. Las pérdidas cooperativas se compensarán primero mediante aportaciones de los socios en proporción a la actividad, y luego con cualquier reserva generada por excedentes cuando la imputación directa al socio resulte gravosa, y no se oponga a ello el 10% de los socios de la Cooperativa. Finalmente conviene subrayar que debería recogerse en la legislación cooperativa la ampliación del plazo para compensar pérdidas a siete años, conforme a la vigente Ley del Impuesto de Sociedades.

3.4.4. TRATAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES DE CAPITAL

Un gran acierto de la Ley navarra es el establecimiento obligatorio de un Fondo de Reserva Especial por subvenciones [art. 44.12° y 63.2° d) Ley Foral Navarra cit.] irrepartible y en el que se incorporen directamente todas las subvenciones de capital. La propuesta es introducir con carácter general este sistema por ser mucho más beneficioso.

3.4.5. DESTINO DEL HABER SOCIAL EN CASO DE LIQUIDACION O TRANSFORMACION EN SOCIEDAD MERCANTIL

La legislación navarra ha recogido casi textualmente la propuesta de la Confederación de Cooperativas que se debatió a nivel nacional, y el movimiento cooperativo navarro negoció con decisión en su Comunidad. Se trata de depositar el Fondo de Educación y Promoción y el Fondo de Reserva Obligatorio en la unión asociativa correspondiente a la clase de Cooperativa de que se trate, junto con el listado de socios, a fin de que durante el plazo de un año los socios puedan utilizar este dinero para pagar su cuota de ingreso en otra Cooperativa de su ámbito. Si los socios no «regresan» al sector Cooperativo, este dinero lo perderán y será destinado por la Unión o Federación correspondiente al fomento de las Cooperativas [art. 61.e) Ley Foral Navarra cit.].

La propuesta nacional contenía el matiz de que el 50% del patrimonio social neto fuese repartible, lo que no ha tenido acceso a la ley navarra.

3.4.6. DEPOSITO DE CUENTAS Y LEGALIZACION DE LIBROS

Se propone que sea obligatorio el depósito de cuentas y legalización de libros en el Registro de Cooperativas competente. Se debe insistir en que las distintas Comunidades Autónomas doten de medios suficientes al Registro para desempeñar sus funciones.

3.4.7. MODALIDADES DE INTERCOOPERACION

Se defiende la idea de que las Cooperativas de segundo y ulterior grado son las fórmulas naturales de la intercooperación y cuyo régimen debe mantenerse, sin olvidar la interesante posibilidad de las Cooperativas de integración (véase la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto n.º 84/1993 de 22 de enero, «BOE» n.º 43 de 19 de febrero, págs. 563 ss.), en la que una mayoría de Cooperativas se asocian con entidades no cooperativas. En cuanto a los acuerdos intercooperativos, la propuesta del movimiento cooperativo ha sido también recogida por el legislador navarro, como antes lo había sido por el vasco, pero reconociendo sin limitaciones la posibilidad de establecer este tipo de acuerdos entre Cooperativas de primer grado, que permitan a otra Cooperativa o a sus socios recibir o entregar productos sin ser considerados como terceros.

3.5. Medidas de fomento cooperativo

3.5.1. LA CONSTITUCION COMO NORMA OBLIGADA PARA LEGISLADORES Y GOBERNANTES

La Constitución Española, en su artículo 129.2, impone a todos los poderes públicos la obligación de fomentar, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. A la hora de negociar una legislación autonómica no resulta irrelevante recordar el mandato constitucional reseñado, que no debe quedar como una cláusula de estilo sino como verdadero motor de toda intervención legislativa o administrativa en materia cooperativa.

3.5.2. MEDIDAS DE FOMENTO EFICACES Y CON CONTENIDO PRESUPUESTARIO

Se considera apropiado reclamar que las leyes de Cooperativas establezcan *medidas de fomento concreto del cooperativismo*, también a través de la regulación detallada de las mismas en la línea de las legislaciones catalana y valenciana. Su contenido presupuestario debe ser acorde con la importancia de la labor que realiza el movimiento cooperativo.

4. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto se desprende que nuestra propuesta pretende colaborar en la racionalización del proceso legislativo buscando su armonización y conseguir dinamizar el funcionamiento de las Cooperativas, siempre dentro de los principios cooperativos esenciales, haciéndolas más operativas al dotarles de todo un bagaje de soluciones distintas para nuevos y viejos problemas. El papel de las organizaciones representativas del cooperativismo será decisivo a la hora de expresar estas inquietudes en cada comunidad, y más adelante para orientar a las Cooperativas para que en sus Estatutos, que ahora más que nunca serán decisivos, identifiquen los sistemas más acordes para encarar los problemas del fin del milenio. Esperemos que entre todos podamos conseguirlo. Muchas gracias.